

No es esta la primera vez en la historia del Perú que la población indígena lleva la peor parte en los conflictos sociales y políticos. Ahora, el informe de la CVR nos da la posibilidad de saber, la oportunidad de trazar una línea divisoria con ese pasado vergonzante.



Fotos: Vera Lentz

Olvido y verdad en la historia del Perú

José Luis Rénique

"Soy un desgraciado; soy Presidente del Perú y no puedo comprender a mis conciudadanos", habría afirmado el presidente Manuel Candamo tras recibir la visita de una delegación indígena de Chucuito, Puno, llegada a Lima

con el fin de denunciar abusos a ellos inferidos por gamonales de su localidad. Candamo respondió enviando una comisión investigadora encabezada por el doctor Alejandrino Maguiña, profesor de Filosofía de la Universidad de San

Marcos y vocal de la Corte Suprema.

A comienzos de 1902 este recorrió la zona aimara del

José Luis Rénique es historiador y profesor en la Universidad de Nueva York.

altiplano bajo la recelosa mirada de los poderosos locales. "Me incitan los indios —dice Maguiña— a quedarme en sus estancias para hablar con más libertad." Guardan silencio frente a las autoridades. Cuando se sienten libres, sin embargo, relatan extensamente "cuanto se relaciona con los abusos de que son víctimas".

Ocurrió con frecuencia en aquellos tiempos: mensajeros indígenas remontando cordilleras en busca de justicia; mandatarios benévols enviando comisionados como Maguiña en busca de la verdad. Poco o nada cambió; las "verdades" que revelaron se perdieron en el laberinto burocrático.

Uno de ellos —el sargento mayor Teodomiro Gutiérrez Cuevas— volvió de su misión, además de con su informe, con una delegación de veintidós personas con quienes visitó varias redacciones de la capital, dejando una honda impresión en algunos periodistas. Las quejas de los humildes indios —según un redactor de *La Crónica*— no constituyen "un sonido nuevo; es una voz profunda y uniforme que viene de miles de infortunados privados de sus derechos y forzados a la esclavitud". Una voz que "quiere hablar a las conciencias antes que recurrir a la insurrección", manchando con sangre la tierra que han heredado y que les está siendo arrebatada en oscuras operaciones camufladas bajo una fachada de legalidad escrita

cuyo significado sus legítimos poseedores no logran comprender".

Con Leguía la esperanza renació. Con su respaldo, el indigenista puneño José Antonio Encinas gestionó en el Parlamento el envío de una nueva comisión a su tierra. Esta ya no solo investigaría sino que tendría capacidad de resolver conflictos *in situ* a la manera de una corte itinerante. El poder local cerró filas contra ella. Sus sorprendidos integrantes se encontraron en las punas de Carabaya o Azángaro con grandes masas de reclamantes.

Como luego se enterarían por vía telegráfica, la violencia comenzó a poco de su partida, culminando en la masacre de

Llallahua en el distrito de Santiago de Pupuja en octubre de 1920: doce muertos y cuatro heridos fue el saldo del ataque de una banda gamonal en contra de los campesinos.

No faltaron pues las comisiones. Sus revelaciones conmoveron, indignaron, asustaron, sin provocar cambios significativos. Traspasado por las migraciones, la movilización campesina y las leyes agrarias, eventualmente, el cerco cayó. No sin dejar un pesado legado mental; como si su viejo poder excluyente se reactualizara en gestos, actitudes y una marcada indolencia moral; factores, todos ellos, que ayudaron al "Perú oficial" a distanciarse de la violencia que abatía a su contraparte andina.



Aunque dedicado a investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1980 y el 2000, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación aparece como un hito en una historia mucho más larga, como la posibilidad de un nuevo comienzo.

Contra sus declaradas intenciones, las propias ideologías proindígenas aportaron su cuota al efecto distorsionador. En 1923, en Huancané, el ciclo altioplánico de resistencia indígena al avance del latifundio llegaría a su fin. Seguras de contar con el respaldo del *Wiracocha* Leguía, las comunidades del área se propusieron fundar su propio orden: no acudirían más al mercado de los mistis; hasta tendrían —en Wancho Lima— su propia capital quechua-aimara.

El intento suscitó una represión brutal. Uno de sus protagonistas —Mariano Lariqo Yujra— vivió el tiempo suficiente como para contarle en los años noventa al intelectual huancaneño José Luis Ayala de las pretensiones de los rebeldes y de la fuga a Lima de muchos de los sobrevivientes. José Carlos Mariátegui —reveló— fue "el único que nos ayudó, nos orientó y nos explicó lo que había pasado".

Mariátegui —según José Luis Ayala— "valientemente denunció" el "silencio de parlamentarios y de la prensa oficialista". Y, sin embargo, era poco lo

que, según el Amauta, podría conseguirse con las movilizaciones locales a las que hasta entonces el campesinado indígena había recurrido.

Así, en la visión de socialistas como Mariátegui estas quedaban relegadas a un pasado prepolítico, de motines y jacqueries. Ni Mariano Paqo ni Mariano Yuqra ni ninguno de los dirigentes comuneros que, según este último, lo visitaron hacia mediados de los veinte, alcanzó figuración en sus textos o sus numerosas biografías pletóricas de intelectuales hispanoamericanos y europeos. Fue la visión que transmitirían en sus más de sesenta ediciones los célebres *7 ensayos* de Mariátegui.

La sierra atrapada en el pasado: ahí, "los raigones de feudalidad" traídos por España estaban "intactos". Los indios, congelados en ese pasado: "todas sus revueltas, todas sus tempestades, ahogadas en sangre", y el "silencio de la puna" guardando "el trágico secreto" de sus respuestas desesperadas, solo con "la propagación de las ideas socialistas" traería "un

fuerte movimiento de reivindicación indígena".

De signos claramente opuestos, sobre el telón de la exclusión campesina ambas perspectivas intentaron escribir el guion histórico de la población rural andina del Perú. De este, no obstante, esta iría zafándose paulatinamente hasta convertir su accionar en un masivo desborde que transformó "desde abajo" la patria criolla que nos legara el XIX.

Los ochenta, sin embargo, nos regresaron súbitamente a los tiempos de la impunidad gamonalista: "mandos políticos" y oficiales militares con apodos como *Lince* o *Camión* autoinvestidos con el derecho de definir la vida o la muerte de otros peruanos como ellos.

Campesinos quechuahablantes, nuevamente, fueron las víctimas largamente mayoritarias de la violencia. La vida, esta vez, nos ha dado la posibilidad de saber, la posibilidad de trazar una línea divisoria con ese pasado vergonzante. Aunque dedicado a investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1980 y el 2000, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación aparece como un hito en una historia mucho más larga, como la posibilidad de un nuevo comienzo. Como la oportunidad de saldar cuentas, toda una manera de lidiar con los conflictos emanados de nuestra compleja constitución nacional. ▲